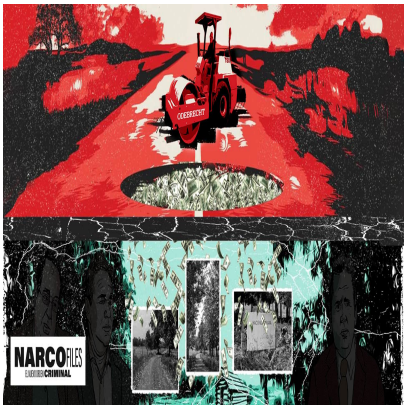


La sombra del narco planea sobre el caso de Odebrecht en Colombia

DescripciÃ³n

armando.info

El capÃtulo colombiano del escÃ¡ndalo internacional de Odebrecht parece no tener fin. Desde 2008 hasta 2015, la multinacional brasileÃ±a de ingenierÃa pagÃ³ alrededor de 56 millones de dÃ³lares en sobornos a polÃticos y funcionarios pÃºblicos, solo en este paÃs sudamericano, para quedarse con varios contratos de obra y conseguir ventaja en negocios futuros.

En el Ãºltimo aÃ±o, la FiscalÃa ha imputado a un centenar de personas. En agosto, el Grupo Aval, del hombre mÃ¡s rico del paÃs, Luis Carlos Sarmiento, y su fiduciaria, CorporaciÃ³n Financiera Colombiana S.A., llegaron a un acuerdo prejudicial con el Departamento de Justicia estadounidense por cuenta del amplio material probatorio que los involucra en un â??importante ardid de sobornosâ?• en el caso de la Ruta del Sol II, una autopista que debÃa conectar BogotÃ¡ con la costa Caribe. El acuerdo impone amplias obligaciones a cargo de las entidades financieras, incluyendo la entrega de informaciÃ³n sobre los ilÃcitos posiblemente cometidos, asÃ como el pago de 80 millones de dÃ³lares.

A pesar de estos avances, en Colombia la justicia aÃºn no termina de identificar a todos los receptores de los multimillonarios sobornos, ni de esclarecer Ãntegramente las rutas sinuosas de estos dineros ilegales. Esta investigaciÃ³n transfronteriza entre Noticias Caracol, el Centro Latinoamericano de InvestigaciÃ³n PeriodÃstica (CLIP) y el *Organized Crime and Corruption Reporting Project* (OCCRP) encontrÃ³ un actor hasta ahora no identificado en la trama judicial de Odebrecht en Colombia: el narcotrÃ¡fico. Son conocidos los prontuarios criminales de algunos intermediarios que contratÃ³ la multinacional para repartir sobornos o hacer lobby ante las autoridades y favorecer sus intereses, como Otto Bula, condenado por estos hechos. No obstante, al seguir el camino del dinero, este trabajo periodÃstico revela vÃnculos de cabilderos con la mafia que hasta ahora han sido omitidos por la justicia. Desnuda ademÃ¡s operaciones vinculadas a tres fincas que revolvieron coimas y narcodineros en la misma mÃ¡quina lavadora.

De los centenares de fallos judiciales en Colombia y en el exterior sobre el sonado escÃ¡ndalo *Lava Jato*, del que Odebrecht fue protagonista, esta historia permite entrever que, al menos en Colombia, algunas venas por donde corrieron dineros sucios de la compaÃ±Ãa brasileÃ±a pasaron por el corazÃ³n del crimen organizado.

Un sobornador que cuidaba su reputaciÃ³n

El sofisticado sistema de fondos ilegales del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht moviÃ³ el dinero desde sus cuentas bancarias en Antigua, Andorra, Portugal, entre otros paÃses, hacia empresas offshore de intermediarios. Luego, Ã©stos le ayudaban a â??bajarloâ?• a los paÃses y repartirlo a sus sobornados. Semejante esquema demuestra hasta dÃ³nde llegÃ³ la multinacional para esconder sus operaciones clandestinas. QuerÃa ganar contratos rÃ¡pidamente, pero a la vez mantener su reputaciÃ³n de ser una eficaz firma internacional de ingenierÃa sin tacha.

Los ejecutivos de Odebrecht encargados de coordinar los pagos ilegales solÃan elegir intermediarios de bajo perfil, segÃºn relatÃ³ a este equipo periodÃstico una autoridad brasileÃ±a que estuvo muy cerca de la investigaciÃ³n.

En Colombia, segÃºn dijeron ante las autoridades los confesos lobbistas, los ejecutivos de Odebrecht solÃan imponer condiciones para tramitar los pagos. Uno de los lobbistas contratado por la constructora para impulsar estas operaciones ilegales, Federico Gaviria, le dijo a la FiscalÃa que, con la entrada en 2013 del nuevo director superintendente, Eleuberto Martorelli, la multinacional les pedÃa proponer â??empresas serias, o empresas con trayectoriaâ?• porque iban a ser aprobadas en Brasil para poder hacer los giros a travÃ©s de ellas.

armando.info

Mientras esto exigÃan, los directores de la empresa constructora no vieron problema en pagar millones por el trabajo de intermediaciÃ³n y cabildeo a lobbistas, como el mencionado Gaviria y al exsenador Otto Bula, a pesar de sus nexos oscuros. JosÃ© Byron Piedrahita, un gran narcotraficante que habÃa conseguido pasar por ganadero legÃtimo por dos dÃ©cadas, llegÃ³ a un acuerdo con la FiscalÃa General y confesÃ³ que habÃa mantenido relaciones comerciales con ambos.

En 2011, Bula tuvo su primer contacto con Luiz Bueno, director de Odebrecht para Colombia, a travÃ©s de Federico Gaviria, un ingeniero civil que venÃa trabajando con la multinacional desde aÃ±os atrÃ¡s y hasta 2017, cuando la justicia colombiana empezÃ³ la investigaciÃ³n de los sobornos que la multinacional habÃa pagado en el paÃs. Gaviria probÃ³ ser un asesor y lobbista efectivo por sus contactos empresariales y polÃticos de tres directores de Odebrecht para Colombia: Marcelo Jardim, Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli. Mientras ejercÃa esa labor, Gaviria tambiÃ©n pagÃ³ sobornos para quedarse con un contrato por 67 mil millones de pesos con la SecretarÃa Distrital de Salud de BogotÃ¡, segÃºn Ã©l mismo admitiÃ³ ante la justicia.

Las conexiones no resueltas entre escÃ¡ndalo Odebrecth y el CRIMEN ORGANIZADO by ArmandoInfo on Scribd

Â¿Por quÃ© la multinacional, que querÃa preservar su imagen, eligiÃ³ trabajar con estos personajes?

Este equipo periodÃstico enviÃ³ preguntas a Novonor (el nuevo nombre que adoptÃ³ Odebrecht tras su quiebra en Brasil) con estas y otras sobre las operaciones de las fincas y la empresa respondiÃ³ que â??no comenta sobre el contenido de la informaciÃ³n proporcionada de forma confidencial en el Ã¡mbito de los procedimientos realizados por las autoridades pÃºblicas en Colombiaâ?•. ReiterÃ³, ademÃ¡s â??que ha venido colaborando desde 2016 con autoridades de diversas jurisdicciones y, amparados por los protocolos del mecanismo de cooperaciÃ³n judicial, la compaÃ±Ãa y personas naturales colaboradoras han aportado y pueden seguir aportando elementos materiales probatorios en la jurisdicciÃ³n colombiana, como se ha hecho en otros paÃses, coadyuvando a hacer claridad sobre

materias de interÃ©s investigativoâ?•.

En los Ãºltimos aÃ±os, la compaÃ±Ãa ha llevado a cabo una profunda reestructuraciÃ³n de su gobierno corporativo y programa de integridad, aplicando reconocidos y eficaces estÃ¡ndares de cumplimiento en sus procesos internos y externos. Monitores independientes aprobados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Ministerio PÃºblico Federal de Brasil certificaron que el Programa de Integridad de Odebrecht y, en octubre de 2022, en su Informe Anual sobre el Sistema de Sanciones, el Banco Mundial, seÃ±alÃ³ a la empresa â??como lÃder entre las organizaciones enfocadas en el cumplimiento (*compliance*)â?•.

Puede ser revelador el hecho de que algunos de estos intermediarios tenÃan acceso a polÃticos de peso nacional. Bula, por ejemplo, habÃa salido elegido al Senado en fÃ³rmula con su socio Mario Uribe, ex presidente del Congreso. Ã?ste habÃa sido gran aliado polÃtico de su primo, Ã•lvaro Uribe VÃ©lez, en su primer perÃodo en la Presidencia de Colombia, precisamente cuando Odebrecht regresÃ³ al paÃs a buscar contratos, despuÃ©s de una larga ausencia. Mario Uribe fue condenado como cÃ³mplice del paramilitarismo que asolÃ³ el paÃs entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo, dejando millones de vÃctimas de masacres, despojo y otros crÃmenes.

armando.info

Una fuente vinculada a la empresa y que acompaÃ±a el caso en Colombia, que pidiÃ³ no ser identificada, indicÃ³ que nunca hubo ninguna intenciÃ³n de aproximaciÃ³n a personas u organizaciones para vincular a la empresa mÃ¡s allÃ¡ del alcance de los proyectos de infraestructura que realizaba en el paÃs. AsegurÃ³ que su foco siempre fue la infraestructura y que si hubo personas que trabajaban externamente para la empresa y tambiÃ©n en otras actividades, con otros grupos y fines, no fue deliberado ni intencional y, probablemente, no era conocido por los integrantes de la empresa.

La falsa compra de â??Villa Estherâ??

A comienzos de 2013, Odebrecht necesitaba mover fondos ilegales para pagar sobornos a congresistas y funcionarios por haber conseguido que el gobierno firmara con la multinacional, un contrato de â??estabilidad jurÃdicaâ?•, que les congelÃ³ las condiciones fiscales durante la construcciÃ³n de la Ruta del Sol II, haciÃ©ndola mÃ¡s rentable.

SegÃºn dijo Bula a la FiscalÃa, Odebrecht le pidiÃ³ una cuenta en el exterior para poder efectuar el pago por la "eficiente gestiÃ³n". Por esa razÃ³n acudiÃ³ al empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, un ganadero amigo de Mario Uribe, que tenÃa una empresa offshore en PanamÃ¡ llamada New Com Int.

A esa empresa entraron en febrero de 2013, 2,5 millones de dÃ³lares (equivalentes a 4.000 lmillones de pesos de la Ã©poca). SegÃºn la contabilidad secreta de Odebrecht, quien transfiriÃ³ ese dinero fue Klienfeld Services, una sociedad offshore en Antigua y Barbuda que la multinacional usÃ³ como pantalla para repartir sobornos en varios paÃses. Y desde New Com Int se giraron los dineros a Colombia mediante consignaciones a la empresa Comunicar y Transmitir, de la que Restrepo fue fundador, como quedÃ³ documentado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una vez los fondos estuvieron en Colombia, fueron entregados en varios cheques a Otto Bula, quien los hizo llegar hasta los bolsillos de los lobistas que habÃan hecho posible el contrato de â??estabilidad jurÃdicaâ?• tan requerida por Odebrecht.

El dÃa 14 de ese mismo mes se firmÃ³ una promesa de compraventa en Colombia por la cual el mismo Restrepo Osorio se comprometÃa a vender su finca en el municipio de La Estrella, Departamento de Antioquia, llamada *Villa Esther*, por 12.000 millones de pesos. SegÃºn el documento, la finca tenÃa 20 hectÃ¡reas, pero sÃ³lo seis hectÃ¡reas se estaban comprometiendo en la venta, que incluÃan una casona, una piscina, un establo y un quiosco. Como comprador aparecÃa Klienfeld Services Ltd, y JosÃ© Antonio Bonnet LlinÃ¡s, excompaÃ±ero de trabajo y conocido de muchos aÃ±os de Federico Gaviria, segÃºn Ã©ste dijo a los fiscales, se presentÃ³ como su apoderado.

Los reporteros enviaron preguntas a Bonnet LlinÃ¡s para saber desde cuÃ¡ndo habÃa sido nombrado apoderado de la empresa extranjera y bajo quÃ© circunstancias representÃ³ a dos empresas en las que aparece como gerente, pero hasta el cierre de esta historia no habÃa respondido.

Fotoleyenda: Contrato de promesa de compraventa de la finca â??Villa Estherâ??. Suscrito entre el empresario Hernando Mario Restrepo Osorio, en representaciÃ³n de la sociedad Simtec SA, y JosÃ© Antonio Bonnet LlinÃ¡s, en representaciÃ³n de Klienfeld Services Limited, empresa pantalla de Odebrecht

Contrato promesa de compraventa Villa Esther by ArmandoInfo on Scribd

armando.info

Sin embargo, conforme al certificado de tradiciÃ³n y libertad, el traspaso real del inmueble que estaba previsto para diez dÃas despuÃ©s de firmar la promesa de compraventa, nunca sucediÃ³. Para lo que parece haber servido esta falsa operaciÃ³n inmobiliaria fue para camuflar la traÃda al paÃs de al menos 2,5 millones de dÃ³lares y legitimarla ante los bancos.

Restrepo asegurÃ³ que prestÃ³ sus cuentas para traer el dinero a Colombia porque le habÃan dicho que se trataba de una transacciÃ³n legal. Incluso, dijo que Bula lo llevÃ³ a dos reuniones con Yesid Arocha, director jurÃdico de Odebrecht. Pero que, a Ãºltimo momento, la negociaciÃ³n cambiÃ³ de rumbo y no incluyÃ³ el intercambio de la finca. â??Lo Ãºnico que hice fue dar mis coordenadas de la cuenta y ellos transfirieron en dos partesâ?•, detallÃ³.

DespuÃ©s de haber recibido el dinero en sus cuentas bancarias, relata Restrepo, recibiÃ³ un reclamo de Bula por los fondos que le habÃan girado. â??Necesito que me pagueâ?•, le pedÃa el exsenador. Aunque Restrepo asegura que no era lo que habÃan convenido, finalmente aceptÃ³ entregarle los fondos al lobbista.

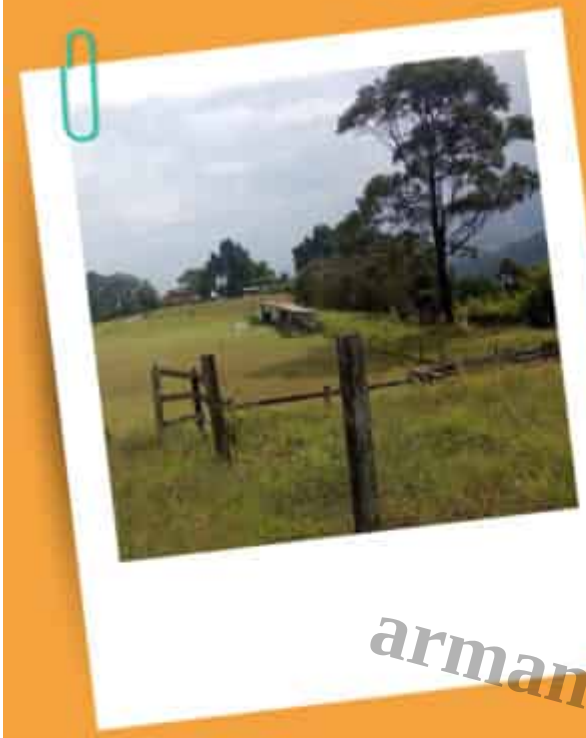
Al final, los dos ganaron: Bula moviÃ³ el dinero hacia Colombia y, a cambio, Restrepo le retuvo el monto correspondiente a una vieja deuda de Bula, segÃºn declararon ambos a la FiscalÃa.

Los sobornos pagados a parlamentarios por lograr la aprobaciÃ³n de la â??estabilidad jurÃdicaâ?• en el Congreso ha sido el capÃtulo central de varias sentencias judiciales: la del lobbista Otto Bula, la del exsenador Bernardo Miguel ElÃas y la del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, por mencionar algunas. Sin embargo, las circunstancias que rodearon el ingreso de los 2,5 millones de dÃ³lares a Colombia aÃºn no han sido esclarecidas del todo, ni tampoco la responsabilidad de quienes participaron en la transacciÃ³n.

Restrepo asegurÃ³ que se habÃa reunido con el director jurÃdico de la multinacional, Yesid Arocha, y que en esas reuniones habÃan acordado la transacciÃ³n en dÃ³lares y el negocio de la finca. No obstante, nadie de Odebrecht ha reconocido hasta el momento la existencia de este contrato simulado

de promesa de compraventa. En las declaraciones de Otto Bula tampoco aparece menciÃ³n alguna a esta compraventa y su firma no aparece en el documento, a pesar de ser la persona que supuestamente iba a comprar la finca. Y esta alianza periodÃstica no encontrÃ³ requerimiento judicial alguno para que Bonnet LlinÃ¡s explique cÃ³mo llegÃ³ a firmar la falsa compraventa y confirme su calidad de representante legal en Colombia de una empresa que era usada por Odebrecht para mover la plata ilegal de las coimas.

armando.info



LAS FINCAS QUE VINCULAN CON EL CRIMEN ORGANIZAD

VILLA ESTH

En febrero de 2013, Odebrecht firmó una promes
adquirir una propiedad llamada Villa Esther al em
Restrepo Osorio, contra quien pesan desde 2005
ser contador del narcotraficante Juan Carlos Ran
"Chupeta" y financiador de paramilitares. Si bien
concretó, Restrepo trajo a Colombia por lo meno
procedentes de la multinacional que fueron a par
pesar de que Odebrecht revisó sus antecedentes

armando.info

ODEBRECHT

31 diciembre 2012

Odebrecht firma contrato de estabilidad jurídica con el gobierno de Colombia.

EMPRESA PANTALLA
Klienfeld Services Limi

14 febrero 2013

Klienfeld Services L
de compraventa con

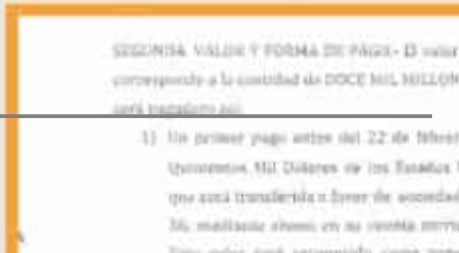
Herr
Rest
finca
las a
Colo

Vinculación según información de prensa y testimonios de paramilitares

Juan Carlos Ramirez Abadía, alias "Chupeta" (cabo del cartel Norte del

Bloque suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia en calidad de

COSTO (US$e



Pero la historia de Hernando Mario Restrepo con la justicia es mucho mÃ¡s amplia. Es amo y seÃ±or de su Caramanta natal (fue presidente del concejo municipal), un pueblo en Antioquia de 5.000 habitantes, donde es gran propietario. La Tesalia SA, su compaÃ±Ãa familiar, comprÃ³ 75 inmuebles en ese municipio desde 1995 hasta la actualidad. Su influencia creciÃ³ hasta codearse con la clase dirigente de la regiÃ³n, como cuando se fotografiÃ³ en una boda junto con Mario Uribe y su mujer.

La riqueza repentina de Restrepo cerniÃ³ una sombra sobre su origen, como explicÃ³ a la FiscalÃa un testigo de la municipalidad de Caramanta, que dijo que en el pueblo se relacionaba su fortuna con presuntos vÃnculos con Juan Carlos RamÃrez AbadÃa, alias *Chupeta*, el poderoso narcotraficante lÃder del CÃ¡rtel del Norte del Valle y preso en Estados Unidos desde 2007.

Cuando Restrepo dijo que se reuniÃ³, en 2013, con el ejecutivo de Odebrecht, su apellido ya habÃa sido vinculado pÃºblicamente con la mafia colombiana. El periodista Daniel Coronell habÃa publicado en 2005 en la revista *Semana* de BogotÃ¡ una columna que lo seÃ±alaba como integrante del cartel liderado por *Chupeta*. La acusaciÃ³n fue ratificada por el jefe paramilitar Juan Carlos RamÃrez Sierra, alias *El Tuso*, que volviÃ³ a vincularlo con este narcotraficante en 2010. â??Restrepo fue el contador, el que le manejaba las finanzas toda la santa vida a *Chupeta*â?•, asegurÃ³ ante la Corte Suprema de Justicia. SegÃºn su testimonio, el empresario es propietario de â??numerosas propiedadesâ?• a nivel departamental, nacional e internacional.

armando.info

Los archivos secretos de un computador de *Chupeta*, a los que tuvieron acceso los autores de la presente historia, que permitieron a las autoridades reconstruir su economÃa ilegal y esclarecer decenas de asesinatos, muestran anotaciones que podrÃan interpretarse como una referencia a Restrepo. Entre los documentos revisados aparece un alias â??006â?• de nombre â??HernÃ¡n Mario Restrepoâ?• y otras menciones a â??Marioâ?• o â??Hernandoâ?•.

AÃ±os mÃ¡s tarde, las acusaciones contra Restrepo se concretaron en expedientes. Documentos judiciales prueban que desde diciembre de 2021 pesa contra el empresario una acusaciÃ³n de la FiscalÃa por financiar y abastecer, junto con su hermano FabiÃ¡n Oswaldo, al Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organizaciÃ³n paramilitar que operÃ³ en la zona de Antioquia, la misma estructura ilegal que, segÃºn la FiscalÃa y una sentencia de Justicia y Paz, se asentaba en fincas del exsenador Mario Uribe. Consultada por esta alianza, la FiscalÃa respondiÃ³ que el proceso contra Restrepo por presuntos vÃnculos con paramilitares estÃ¡ en etapa de juicio y que otra rama especializada adelanta una investigaciÃ³n para esclarecer el origen de la riqueza de Restrepo.

Esta alianza periodÃstica enviÃ³ un cuestionario a Restrepo para preguntarle tanto por su participaciÃ³n en la falsa operaciÃ³n inmobiliaria por la finca Villa Esther como por sus vÃnculos con el paramilitarismo, pero el empresario no respondiÃ³ las consultas.

Si Odebrecht mirÃ³ para otro lado con Restrepo, la elecciÃ³n de Bula como lobbista es aÃºn mÃ¡s difÃcil de explicar para la compaÃ±Ãa, porque este exsenador mantuvo constante relaciÃ³n con los directores brasileÃ±os a cargo de las operaciones en Colombia. Bula llegÃ³ a la alta polÃtica mientras se relacionaba con el crimen organizado. El narcotraficante Piedrahita dijo a la FiscalÃa que, como parte de su esquema de lavado, realizÃ³ intercambios comerciales con Bula desde 2004, que incluyeron entregas mutuas de dinero en efectivo, dos fincas y negocios con ganado por 5.000 millones de pesos colombianos, equivalentes entonces a 1,8 millones de dÃ³lares. Odebrecht debÃa conocer su prontuario, pero igual usÃ³ sus servicios para aceitar el mecanismo de pagos ilegales.

Bula tambiÃ©n quedÃ³ bajo la lupa de la justicia por una supuesta relaciÃ³n con la Oficina de Envigado, una estructura de cobro de deudas creada por Pablo Escobar Gaviria, que luego pasÃ³ a dirigir actividades criminales en MedellÃn. En junio de 2014, segÃºn documentos que forman parte de la filtraciÃ³n *NarcoFiles*, mientras Bula movÃa las maquinarias en el Congreso en favor de Odebrecht, las autoridades colombianas encontraron en la escena del crimen de Wilmer Alexis Metaute, uno de los jefes la Oficina, una carta en que decÃa que Macario Guillermo Arango de LeÃ³n le debÃa a Bula 5.540 millones de pesos -equivalentes a unos 3 millones de dÃ³lares de la Ã©poca-. Esta prueba motivÃ³ una investigaciÃ³n judicial para determinar si el exsenador tendrÃa relaciÃ³n con estos dos individuos vinculados a la Oficina de Envigado. Para esta historia se consultÃ³ a la FiscalÃa por este expediente judicial y otros que involucran a los lobistas de Odebrecht. En una detallada respuesta de siete pÃ¡ginas, la entidad asegurÃ³ que la informaciÃ³n requerida â??no es susceptible de suministrar a los periodistasâ?• pues existen restricciones legales que lo impiden.

Bula tambiÃ©n fue contactado por esta alianza periodÃstica, pero el exsenador no respondiÃ³ las preguntas.

La finca â??ParanÃ¡â?? de Piedrahita

armando.info

Villa Esther no fue la Ãºnica finca que enredÃ³ a Odebrecht con un personaje bajo la sombra mafiosa. El confeso narcotraficante Piedrahita declarÃ³ ante la justicia una historia que lo conecta con la escandalosa saga de sobornos que la constructora brasileÃ±a repartiÃ³ en Colombia. Dijo que Federico Gaviria, otro lobbista clave de la compaÃ±Ãa, junto a otros dos socios, le compraron su hacienda *ParanÃ¡* en 2014 en Planeta Rica, un municipio del Caribe colombiano. La finca para ceba de ganado la habÃa recibido el mismo Piedrahita en 2012, como pago por el millÃ³n de dÃ³lares que le habÃa prestado a un narcotraficante para pagar su defensa en Estados Unidos.

En los papeles de la hacienda, el nombre de Gaviria no figura. Sin embargo, PiedrahÃta ratificÃ³ ante los fiscales que Ã©l sÃ fue clave en el negocio. â??Se vendiÃ³ el 10 de septiembre de 2014 a Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria una finca llamada *ParanÃ¡*, que se encuentra ubicada en Planeta Rica (â?¦) figurando como comprador GestorÃa Profesional Agroindustrial SAS, empresa de propiedad de Profesionales de Bolsa, que fue creada solamente para celebrar este negocioâ?•, dijo Piedrahita.

El registro oficial ratifica esa versiÃ³n: la finca pasÃ³ de manos de Comercializadora Troppo S.A., una sociedad de Piedrahita, a la empresa GestorÃa Profesional Agroindustrial SAS, una compaÃ±Ãa que habÃa sido creada recientemente por Rodrigo Alfredo Mayorga PachÃ³n, Gustavo Adolfo Torres Forero y Teresita Arango Arango. Ellos eran ademÃ¡s accionistas de una firma de corredores de la Bolsa de BogotÃ¡, Profesionales de Bolsa S.A. Ã?sta sociedad tambiÃ©n fue intermediaria de pagos ilegales en la compleja trama que aÃºn hoy, casi una dÃ©cada despuÃ©s de que estallara, sigue sin esclarecerse.

Piedrahita dijo que, en total, la operaciÃ³n pactada fue por 6.153 millones de pesos colombianos â??equivalentes a unos 2,6 millones, segÃºn la tasa de cambio del momentoâ?? y que se firmÃ³ oficialmente por 4.000 millones de pesos colombianos â??1,6 millones de dÃ³laresâ??; es decir, por casi un millÃ³n de dÃ³lares menos. Consultado por esta alianza periodÃstica, el abogado tributarista, Federico Lewin, explicÃ³ que â??no es inusual en Colombia que las compras de tierras se registren por menor valor para evadir impuestos, una prÃ¡ctica que puede acarrear sanciones tributarias o incluso

penalesâ?•.

Sin embargo, en este caso particular, hay una coincidencia notable: la adquisiciÃ³n de la finca, segÃºn el certificado oficial, se concretÃ³ el 26 de enero de 2015. Es decir, diez dÃas despuÃ©s de que Profesionales de Bolsa recibiera el pago de una factura por 2.695 millones de pesos â??equivalentes a 1 millÃ³n de dÃ³laresâ?? de parte de la Concesionaria Ruta del Sol II, de la que Odebrecht era socio principal.

La justicia determinÃ³ que este desembolso, junto a otros tres giros que recibiÃ³ Profesionales de Bolsa por parte de la Concesionaria â??y que sumaron 8.376 millones de pesosâ??, fueron pagos ilegales que se ocultaron bajo la fachada de un contrato ficticio. De esta plata, segÃºn las sentencias judiciales, Gaviria se quedÃ³ con 4.379 millones de pesos como pago por sus gestiones ilegales y 1.962 millones de pesos fueron a Profesionales de Bolsa, razÃ³n por la cual su representante Gustavo Adolfo Torres fue procesado y condenado por enriquecimiento ilÃcito.

No se puede afirmar que la finca *ParanÃ¡* fue comprada precisamente con esos dineros girados por la Concesionaria. Sin embargo, la coincidencia de tiempos, montos y la confesiÃ³n de Piedrahita levantan una sospecha de que la comisiÃ³n ilegal, al comprarle un bien a un narcotraficante, pudo haber servido para lavar dinero. Asimismo, en 2017, Otto Bula asegurÃ³ que alertÃ³ a los investigadores de la FiscalÃa sobre las irregularidades que pudieron haber rodeado la finca *ParanÃ¡*: â??Me entero (del negocio) por el seÃ±or Gustavo Torres o por el seÃ±or Federico Gaviria. Se la compraron al seÃ±or JosÃ© Piedrahita, pero no sÃ© ni cuÃ¡nto costÃ³ ni cÃ³mo lo pagaronâ?•.

armando.info

Esta alianza periodÃstica intentÃ³ comunicarse con Gaviria para preguntarle por distintos hechos mencionados en esta investigaciÃ³n, pero el ingeniero no respondiÃ³ las consultas.

Piedrahita fue condenado por este y otros casos de lavado de dinero. La FiscalÃa asegurÃ³ a esta alianza que actualmente ni la DirecciÃ³n Especializada de ExtinciÃ³n de Dominio ni el Grupo de PersecuciÃ³n de Bienes adelantan investigaciones sobre la finca *ParanÃ¡*. Esto a pesar de que en la apertura de una investigaciÃ³n preliminar de el 31 de enero de 2019 la misma FiscalÃa planteaba "si Gustavo Torres, Teresita Arango y Federico Gaviria, Profesionales de Bolsa, al registrar la compra de la finca *ParanÃ¡* por un valor inferior al pagado en efectivo a travÃ©s de una empresa constituida solo para ese efecto, con el fin de ocultar el origen ilÃcito del dinero, incurrieron al parecer en el delito de lavado de activos".

De la confesiÃ³n de Piedrahita se pudo reconstruir no sÃ³lo el origen ilÃcito de su fortuna, sino tambiÃ©n su red de relaciones, entre ellas con Profesionales de Bolsa, una sociedad que fue clave tanto para la adquisiciÃ³n de la finca ParanÃ¡ como para toda la trama de pagos ilegales de Odebrecht en Colombia.

Nacida a finales de los aÃ±os ochenta en BogotÃ¡, esta firma se especializaba en ofrecer oportunidades de inversiÃ³n en mercados de capitales, asÃ como en el negocio ganadero. Tras el escÃ¡ndalo, Profesionales de Bolsa entrÃ³ en liquidaciÃ³n voluntaria y la Superintendencia Financiera ordenÃ³ la cancelaciÃ³n de su inscripciÃ³n en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores en diciembre de 2018.

Piedrahita hizo Ã©nfasis en su relaciÃ³n con este agente de bolsa al recordar que, cuando estallÃ³ el escÃ¡ndalo que lo complicÃ³ judicialmente desde 2008, a raÃz de una publicaciÃ³n periodÃstica, se le

cerraron muchas puertas de entidades financieras como el BBVA y el Banco de BogotÃ¡, â??pero eso no ocurriÃ³ con Profesionales de Bolsa, que siguieron respaldÃ¡ndome comercial y financieramenteâ?•, seÃ±alan los documentos. Este equipo periodÃstico enviÃ³ consultas al abogado de Mayorga PachÃ³n, Torres y Arango, que fueron accionistas de Profesionales de Bolsa, pero hasta el momento de la publicaciÃ³n no fueron respondidas.

â??La Cubanaâ?? de los herederos de Cifuentes Villa

Tras lograr la aprobaciÃ³n de la leyes que le aseguraron a Odebrecht la â??estabilidad jurÃdicaâ?• en febrero de 2013, Bula y Gaviria ya sabÃan que sus honorarios estaban prÃ³ximos a llegar, segÃºn relatÃ³ el propio Gaviria a la FiscalÃa. AsegurÃ³ que Bula le propuso entonces a su compaÃ±ero hacer un negocio ganadero juntos: comprar *La Cubana*, una antigua finca en CÃ¡ceres (Antioquia) de 1.200 hectÃ¡reas.

Tres fuentes independientes consultadas por esta alianza periodÃstica aseguran que la hacienda habÃa pertenecido al narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, mÃ¡s conocido como *Pacho* Cifuentes, asesinado en 2007, quien fue la mano derecha de Pablo Escobar. SegÃºn las fuentes consultadas, Cifuentes consideraba a la hacienda como uno de sus tesoros y dijeron que, tras su muerte, habÃa quedado en cabeza de sus herederos.

armando.info

La Cubana volviÃ³ a quedar en la mira de las autoridades cuando, ya despuÃ©s de haber sido condenado por el caso Odebrecht, Gaviria entregÃ³ a la justicia un lote de esta finca como parte de la compensaciÃ³n econÃ³mica exigida en los tribunales. Predios sobre los que el Grupo de PersecuciÃ³n de Bienes no tiene ninguna investigaciÃ³n en curso para esclarecer si tienen vÃnculos con grupos organizados al margen de la ley, segÃºn informÃ³ la FiscalÃa como respuesta a un cuestionario de esta alianza.

El trato que hicieron Gaviria y Bula â??segÃºn la versiÃ³n del primeroâ?? fue que el exsenador aportarÃa la finca y el ingeniero, junto a su socio y cuÃ±ado Mauricio LondoÃ±o, se encargarÃan de acondicionar el predio para su uso ganadero y tambiÃ©n de administrar el negocio. Para este fin, crearon la sociedad El Dorado CÃ¡ceres SAS, que concretÃ³ la compra en junio de 2014 a Agropecuaria LSA SAS.

Bula finalmente decidiÃ³ no participar: "Al principio pensÃ© hacer un negocio con esa finca pero la iba a cambiar por propiedades. En esa finca estaban unos herederos, despuÃ©s hubo una diferencia y una cosa ahÃ, entonces yo dije: â??yo no hago ese negocioâ??", explicÃ³ Bula a la FiscalÃa.

Hubo dos intermediarios â??segÃºn Gaviriaâ?? para formalizar la adquisiciÃ³n de la hacienda: un hombre llamado Felipe GÃ³mez, y Juan Fernando RamÃ³n Zapata, hermano del extraditado narcotraficante Carlos RamÃ³n Zapata, alias *El MÃ©dico*. Juan Fernando estuvo casado por varios aÃ±os con Sara Carolina Cifuentes GÃ³mez, una de las hijas del capo *Pacho* Cifuentes. Las fuentes consultadas coincidieron en que este hermano de *El MÃ©dico* participÃ³ en esa operaciÃ³n inmobiliaria en representaciÃ³n de los herederos del capo Cifuentes. SegÃºn los registros de la Rama Judicial, Juan Fernando radicÃ³ la demanda de divorcio de Sara Carolina en 2022.

â??Se acordÃ³ como pago de los â??intermediarios inmobiliariosâ?? la suma de 5.000 millones de pesosâ?•, indicÃ³ Gaviria, y luego explicÃ³ que los desembolsos por el valor de la hacienda se hicieron

entre 2014 y 2016. El lobista aceptÃ³ que el dinero de la finca, procedente de sus honorarios de Odebrecht, habÃa sido pagado a travÃ©s de varias sociedades, entre ellas, Profesionales de Bolsa, Coast Helicopter, Helicontinente, Grupo Mundial de Ingenieros y Consultores Unidos.

En la sentencia judicial contra Gaviria, la mayorÃa de los destinatarios de este dinero no aparecen plenamente identificados, sin embargo, esta alianza pudo corroborar que al menos dos pagos que suman 216 millones de pesos fueron girados directamente a nombre de Ã•ngela MarÃa GÃ³mez de Cifuentes, exesposa del capo asesinado. Estos pagos fueron hechos a travÃ©s de Grupo Mundial de Ingenieros y de la empresa AldepÃ³sitos.

La operaciÃ³n de la que hizo parte AldepÃ³sitos para mover los fondos de Odebrecht fue orquestada por otro lobbista de renombre en esta trama: Eduardo Zambrano Caicedo. Este ingeniero, asesor de la constructora brasileÃ±a, suscribiÃ³ un contrato ficticio con AldepÃ³sitos para hacer llegar el dinero opaco a Colombia. No fue la Ãºnica operaciÃ³n que ordenÃ³. Zambrano confesÃ³ haber movido 12.509 millones de pesos (equivalente a unos 5,1 millones de dÃ³lares al cambio de la Ã©poca) a travÃ©s de la empresa Consultores Unidos.

armando.info

Zambrano jugÃ³ un papel decisivo como intermediario para canalizar el pago de 650 millones de pesos a Roberto Prieto, el gerente de las campaÃ±as presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. SegÃºn la sentencia judicial de Prieto, asÃ se le recompensÃ³ al gerente de esa campaÃ±a por haber gestionado un contrato para Zambrano, representante de Consultores Unidos, dentro de las obras de la Ruta del Sol 3, a cargo de otra concesionaria llamada Yuma, cuyo socio principal era la empresa italiana Impregilo. El dinero, dice el fallo del juez, se tramitÃ³ con el pretexto de "tapar los huecos financieros" de la campaÃ±a de reelecciÃ³n presidencial.

Eduardo Zambrano tambiÃ©n fue pieza clave en el caso contra el exdirector del Instituto Nacional de VÃas (InvÃas), Daniel GarcÃa Arizabaleta, a quien seÃ±alÃ³ de recibir pagos de la multinacional Odebrecht disfrazados como contratos. â??Lo que a mÃ me consta es que Odebrecht, a travÃ©s de Consultores Unidos, mi empresa, le pagÃ³ unos dineros durante el aÃ±o 2012 y 2013 (...) a Daniel GarcÃa Arizabaletaâ?•, explicÃ³ Zambrano a la FiscalÃa. Como soporte de su versiÃ³n, entregÃ³ 13 cheques cobrados por GarcÃa Arizabaleta y que suman alrededor de 280 millones de pesos.

GarcÃa Arizabaleta hoy estÃ¡ negociando con la justicia para recibir inmunidad penal a cambio de su delaciÃ³n en contra del candidato presidencial que enfrentÃ³ a Santos en la segunda vuelta en 2014. GarcÃa dijo que Odebrecht le habÃa pagado al publicista brasileÃ±o *Duda* Mendoza (ya fallecido) para que asesorara la campaÃ±a de Oscar IvÃ¡n Zuluaga.

Por el caso Odebrecht, Zambrano fue condenado a seis aÃ±os de prisiÃ³n por el delito de enriquecimiento ilÃcito de particulares en abril de 2021. Producto de sus confesiones, el ingeniero recibiÃ³ inmunidad penal por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. QuedÃ³ en libertad a finales del aÃ±o pasado.

No parece haber tenido injerencia alguna en la decisiÃ³n de otorgarle inmunidad, el hecho de que Zambrano hubiera estado prÃ³fugo de la justicia en dos ocasiones anteriores. Y no por delitos menores. En 1982, las autoridades bancarias comprobaron una estafa a los ahorristas del Banco del Estado en la cual Zambrano, entonces Vicepresidente de la entidad, fue protagonista. Luego huyÃ³ del paÃs.

En Brasil intentÃ³ infructuosamente conseguir trabajo, e hizo contacto con unos empresarios de MedellÃn a quienes les comenzÃ³ a manejar sus inversiones, segÃºn su propio relato. En febrero de 1983, comprÃ³ un apartamento en RÃo de Janeiro, que pagaba cuentas de telÃ©fono millonarias. Pronto consiguiÃ³ la residencia en ese paÃs.

En 1984, las autoridades de PanamÃ¡, presionadas por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglÃ©s), luego del asesinato a manos de la mafia del ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, desmontaron la construcciÃ³n incipiente de un laboratorio para producir cocaÃna en el DariÃ©n e incautaron decenas de tanques de Ã©ter. La pesquisa los llevÃ³ a Zambrano, quien declarÃ³ ante la policÃa panameÃ±a como informante bajo el nombre de *JosÃ© Caicedo* (su segundo nombre y su segundo apellido).

AllÃ contÃ³ que Ã©l habÃa hecho un pago de 200.000 dÃ³lares a la campaÃ±a presidencial del panameÃ±o Nicolas Ardito Barletta a nombre de los carteles de la mafia colombiana. El aporte buscaba granjearse el visto bueno â??o la vista gordaâ?? del gobierno de ese paÃs para montar un laboratorio de producciÃ³n de cocaÃna en las selvas del DariÃ©n. El ingeniero colombiano contÃ³ que Ã©l mismo habÃa estado en varias reuniones, a nombre de los narcos colombianos, con coroneles del entonces jefe de las Fuerzas de Defensa panameÃ±as, el general Manuel Antonio Noriega, para acordar finalmente que el soborno a esas fuerzas serÃa de 4 millones de dÃ³lares mÃ¡s otros 200 dÃ³lares por kilo de cocaÃna producido. Esperaban producir 5.000 kilos mensuales. AsÃ podrÃan montar su laboratorio e importar sin problemas acetona y Ã©ter (precursores quÃmicos para procesar la coca). No obstante, por la presiÃ³n estadounidense, no les cumplieron el trato.

armando.info

La policÃa panameÃ±a encontrÃ³ documentos en poder de Zambrano que reflejan el movimiento financiero del grupo internacional de traficantes de droga por casi 11 millones de dÃ³lares de esa Ã©poca (unos 32 millones de dÃ³lares de hoy). Varias facturas tenÃan como beneficiario a Vicente Wilson Rivera GonzÃ¡lez, quiÃ©n luego fue identificado como jefe de un cÃ¡rtel en la AmazonÃa entre Colombia y Brasil.

Zambrano fue expulsado de PanamÃ¡, pero la policÃa brasileÃ±a, que tambiÃ©n habÃa desatado una ofensiva contra las organizaciones de narcotraficantes que pretendÃan montar sus laboratorios en la AmazonÃa de Brasil, siguiendo la pista de Vicente Rivera, descubriÃ³ que Ã©ste usaba el departamento de RÃo que figuraba a nombre de Zambrano.

En abril de 1987, el Ministerio PÃºblico Federal de Brasil acusÃ³ a Rivera, Zambrano y a otros por haberse asociado entre 1984 y 1985 para haber â??implantado y comandado una empresa criminal relacionada con el trÃ¡fico internacional de clorhidrato de cocaÃna, a travÃ©s de la adquisiciÃ³n de sustancias quÃmicas Ã©ter y acetona, con vistas a la producciÃ³n, refinamiento y distribuciÃ³n, a gran escala, del enervante para diversos paÃsesâ?•. TambiÃ©n le quitaron el apartamento por considerarlo fruto de dinero ilÃcito. El juez federal, Helio de Matos, los condenÃ³ diez aÃ±os despuÃ©s, en 1997. A Zambrano le impuso cuatro aÃ±os de prisiÃ³n, pero como tampoco se habÃa presentado ante la justicia, y pasÃ³ tanto tiempo entre la acusaciÃ³n y la condena, el juez declarÃ³ la â??punibilidad extintaâ?• de su caso.

Un voluminoso expediente de la justicia brasileÃ±a, de mÃ¡s de 800 pÃ¡ginas, consultado por esta alianza periodÃstica, revela esos capÃtulos desconocidos de PanamÃ¡ y de Brasil, en la larga historia delictiva de Zambrano. Este equipo enviÃ³ preguntas a Zambrano a travÃ©s de uno de sus hijos y de su abogado para tener su versiÃ³n tanto su participaciÃ³n en el caso Odebrecht como la relaciÃ³n que

tuvo con el narcotrÃ¡fico, pero no hubo respuesta.

Zambrano regresÃ³ a Colombia y se reinventÃ³ como socio de Consultores Unidos, la empresa que luego involucrÃ³ en pagos ilegales para Odebrecht. Sus vÃnculos con el narcotrÃ¡fico pasaron al olvido, salvo por el periodista Alberto DonadÃo, que citÃ³ en su libro *Nobelbrecht* y en una columna de opiniÃ³n que el nombre de Zambrano habÃa salido en la prensa en los ochentas asociado al Cartel de MedellÃn. Esta investigaciÃ³n corrobora esa versiÃ³n con el expediente original del caso en Brasil.

AÃºn asÃ, la FiscalÃa no parece haber atado ningÃºn cabo.

A partir de distintas confesiones, como la de Piedrahita, pero tambiÃ©n de las otras investigaciones aquÃ mencionadas, la FiscalÃa ha acumulado en sus escritorios pruebas que apuntan a la complicidad de intermediarios en el caso Odebrecht con narcotraficantes y paramilitares. AÃºn asÃ, la entidad ha ofrecido rebajas de penas por colaboraciÃ³n a varios de ellos, aunque no parecen haber confesado la parte mÃ¡s oscura de sus operaciones ilegales. En menos de siete aÃ±os, casi todos ellos lograron recuperar su libertad y otros ni siquiera han sido procesados.

Las sentencias de los jueces en el caso Odebrecht tampoco ahondan en estas conexiones de lobbistas e intermediarios con el crimen organizado.

armando.info

Este contenido es parte de 'NarcoFiles: el nuevo orden criminal', una investigaciÃ³n periodÃstica transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentÃ¡culos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) con el apoyo del Centro Latinoamericano de InvestigaciÃ³n PeriodÃstica (CLIP), se iniciÃ³ con una filtraciÃ³n de correos electrÃ³nicos de la FiscalÃa General de la NaciÃ³n de Colombia que fue compartida con Armando.info y 40 medios de comunicaciÃ³n en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.

La presente historia tuvo el apoyo de OCCRP, IDL-Reporteros (PerÃº) y La Prensa (PanamÃ¡)

Fecha de creaciÃ³n
2023/11/12